(Tomado de EL TIEMPO, Marzo 4/85)

LA TRIBUTACION DEL SECTOR AGROPECUARIO

Por: HERNAN JARAMILLO
OCAMPO

El gobierno viene trabajando con mucha inteligencia en una política de impulso a las exportaciones, pues la debilidad de nuestra balanza comercial constituye en los actuales momentos, junto con la crisis fiscal, el obstáculo mayor para imprimirle un ritmo acelerado al desarrollo económico. Liberar las exportaciones, suprimir trámites, apoyar con crédito y con otra serie de medidas la venta de los productos colombianos es un programa que merece el mayor apoyo.

Sin embargo, para exportar no solo se requiere que se creen facilidades administrativas sino es preciso, como es elemental, contar con bienes que puedan venderse a precios competitivos en el mercado externo. Surge entonces la urgencia de organizar una política económica que acelera el crecimiento de la producción nacional, especialmente en aquellas áreas en las que contamos o podemos contar con una auténtica ventaja comparativa.

Los programas de subsidio o de altas tasas de devaluación son insuficientes si efectivamente el país no logra, tanto en el sector industrial como en el agrícola, mejorar sustancialmente sus niveles de productividad. Tengo para mí que la pieza maestra en la estrategia futura de nuestro desarrollo es el sector rural y que es allí donde podemos concentrar los mayores esfuerzos no solo para ampliar la frontera agrícola, con ambiciosos programas de adecuación e irrigación de tierras,

especialmente en la Región Caribe, sino también con una racionalización del mercadeo y una mejora sustancial de la tecnología en la utilización de la tierra y del agua. Todo ello es posible, dentro del marco de la empresa privada, si adoptamos un tratamiento tributario que incite efectivamente al ahorro nacional hacia la producción agropecuaria.

En casi todos los países del mundo del patrimonio y la renta rurales gozan de un tratamiento impositivo favorable frente a las tasas aplicables a otros sectores.

Si el país desea alcanzar un programa ambicioso de producción agropecuaria necesita, por lo tanto, ofrecer a los inversionistas un programa tributario que contemple los siguientes beneficios: **un régimen de deducciones para los cultivos de tardío rendimiento, que en parte ya se está aplicando con muy benéficos resultados, como en el caso de la palma africana;** (la negrilla es nuestra) una tarifa de la renta presuntiva superior al 4% sobre el patrimonio, tal como se programó en la ley 4a. de 1973; una serie de exenciones tributarias para los inversiones que se hagan en adecuación y en infraestructura agrícola.

Existen razones y justificaciones de tipo económico y social para que la renta agrícola soporte una tarifa inferior a la originada en actividades comerciales o industriales. En parte se trata de aplicar el sistema de la renta celular o sea de tarifas diferenciales, de acuerdo con el origen de las utilidades a gravar. Tal política la practican la mayoría de los países europeos y en Estados Unidos el patrimonio y la renta agrícola gozan también de un régimen especial.

Las medidas que se sugieren fueron oportunamente incorporadas, bajo el gobierno de Misael Pastrana, en la Ley 5a. de 1973. Desafortunadamente la reforma tributaria de 1974 las suprimió y

la renta agropecuaria se colocó en las mismas condiciones impositivas de los otros sectores de la economía.

La renta agrícola es incierta, pues depende de las caprichosas fluctuaciones climáticas y de las oscilaciones también imprevisibles de los precios. Igualmente el patrimonio representado en bienes raíces goza de poca liquidez, en contraste con los activos comerciales e industriales. Por otra parte, el Estado colombiano ha concentrado los servicios, la vigilancia, la asistencia social, la educación y el esparcimiento en los grandes centros urbanos. Por esa razón al contribuyente de las ciudades el Estado le retorna en servicios parte sustancial de los tributos que paga.

En cambio el colombiano que vive y trabaja en los campos, casi que desconoce la existencia del Estado, pues son muy escasos y deficientes los servicios que de él recibe.

Si queremos organizar una dinámica ambiciosa de crecimiento del ingreso tenemos que hacer de la actividad agropecuaria el instrumento impulsor del desarrollo y que es en la producción primaria donde podemos descubrir y administrar nuestra ventaja comparativa, pues, en las industrias livianas, como los textiles y las confecciones, nos vemos enfrentados a una muy difícil competencia con los países asiáticos y a una política rígidamente proteccionista de los países industrializados.

Hasta ahora el campo colombiano ha vivido de promesas y esperanzas, casi todas ellas frustradas. Es tiempo ya, cuando la dirección del Estado reposa en dirigentes que desean y puedan darle una misión histórica a su tarea, de que organicemos una auténtica política de progreso agropecuario. Para ello estoy seguro que contaremos con el respaldo financiero del Banco Mundial y del Banco Interamericano.

Marzo 15 de 1985